
Procedimiento administrativo

Mónica DOMÍNGUEZ MARTÍN
Profesora Doctora de Derecho Administrativo
Universidad Autónoma de Madrid

Sumario: I. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN: INICIACIÓN, TRAMITACIÓN Y FINALIZACIÓN. – II. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: 1. Contratación administrativa local. 2. Gestión e inspección tributaria. 3. Procedimiento sancionador. 4. Urbanismo. 5. Energía. 6. Mediación familiar.

I. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN: INICIACIÓN, TRAMITACIÓN Y FINALIZACIÓN

Con la pretensión de ganar productividad en el funcionamiento de las Administraciones públicas y de que el ciudadano reciba mejores servicios a un menor coste para las Administraciones públicas se ha aprobado la *Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos*, que marca el 31 de diciembre de 2009 como fecha límite para que todas las Administraciones públicas ofrezcan de forma electrónica los servicios que prestan, agrupa en una norma común toda la regulación relacionada que hasta ahora se encontraba dispersa ¹, consolida un régimen común de garantías y derechos de ciudadanos y empresas, y adapta el marco jurídico a la realidad tecnológica actual. La Ley regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa de todas las Administraciones públicas, en las relaciones entre ellas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas, con el fin de garantizar un tratamiento común ante ellas en condiciones de seguridad jurídica (arts. 1 y 2). Entre otros derechos, la Ley garantiza: Que

1. Así, deroga los preceptos de la LRJPAC que, hasta ahora, regulaban la utilización por las Administraciones Públicas de medios técnicos y telemáticos (en concreto, los arts. 38.9, 45.2, 45.3, 45.4, 59.3 y la Disposición Adicional 18).

los ciudadanos elijan el canal a través del que se relacionan con las administraciones públicas (oficina, teléfono, Internet, etcétera); que los ciudadanos no tengan que aportar datos que ya estén en poder de las Administraciones y que, cuando sea necesario, la puedan remitir en formato electrónico; que los ciudadanos puedan conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que se encuentren inmersos; que los ciudadanos puedan obtener copias electrónicas de los documentos oficiales; que la relación electrónica con las Administraciones pueda desarrollarse a través de cualquier tecnología; que las distintas Administraciones puedan operar e intercambiar datos entre ellas.

Esta Ley fomenta también la proactividad, favoreciendo el que sean las Administraciones las encargadas de avisar a los ciudadanos de la necesidad o posibilidad de realizar un determinado trámite y de ofrecer los documentos precumplimentados para que éstos, siempre que sea posible, sólo tengan que aceptar o modificar el ofrecimiento que realice la Administración. Además, todos los servicios han de respetar las normas existentes en materia de accesibilidad, neutralidad tecnológica e idiomas cooficiales. Así, la Disposición Adicional Sexta establece la garantía del uso de las lenguas oficiales del Estado en las relaciones por medios electrónicos de los ciudadanos con las Administraciones Públicas.

De la Ley, también merece destacarse que establece un nuevo modelo de acceso a los servicios públicos tanto a través de los puntos propios de cada Departamento, como a través de un punto de acceso global, de forma que no sea necesario que el ciudadano tenga que conocer la estructura interna de la Administración para poder utilizarlos.

En su Disposición Adicional 3.^a se prevé la aprobación de un Plan de Desarrollo para la Administración General del Estado, lo que ha realizado el Consejo de Ministros el día 28 de diciembre de 2007.

Como novedad legislativa en esta materia, también la Comunidad Foral de Navarra ha aprobado la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, de Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

En cuanto a las aportaciones doctrinales en esta materia y sus repercusiones en la Administración local, se puede citar el trabajo de Adela MESA DEL OLMO, titulado «La Administración electrónica en el ámbito local del País Vasco: el desarrollo de las páginas web municipales» (*Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 77, 2007, pp. 177-208).

Dentro de las novedades doctrinales, y ya desde una perspectiva más genérica, Francisco LÓPEZ-NIETO Y MALLO bajo el título *Procedimiento administrativo de las Entidades Locales* (Bayer Hermanos, 2007) ofrece una exposición detallada de los diferentes procedimientos que están obligados a seguir todas las entidades locales, con un enfoque práctico, que se completa con un amplio repertorio de documentos, formularios y reglamentos (cerca de un centenar). Por último, incluye también una pequeña selección de la normativa aplicable. En concreto, el contenido de la obra incluye, en

lo que aquí interesa, el análisis de los siguientes elementos: fuentes del procedimiento, el procedimiento administrativo, los interesados en el procedimiento, procedimiento general y procedimientos especiales (sancionador, disciplinario, sancionador, reclamaciones previas a la vía judicial), procedimiento de revisión (recursos, revisión de oficio, impugnación de actos y acuerdos por el Estado y las Comunidades Autónomas, suspensión por el Delegado del Gobierno), procedimiento tributario, procedimiento de responsabilidad y participación ciudadana.

Aunque referido sólo a Madrid, se ha publicado el libro coordinado por Antonio TRONCOSO REIGADA, *Comentarios a la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid. Ley 22/2006, de 4 de julio* (Aranzadi, 2007), que, junto a un conjunto de comentarios generales de la Ley, contiene un estudio exhaustivo de su articulado en el que se aborda el régimen de capitalidad, el gobierno y la administración municipal, el régimen jurídico y procedimiento y las competencias municipales, con especial referencia a la seguridad pública y a la seguridad vial. Además, se incluye un conjunto de estudios comparativos en relación con Berlín, Roma, París y con el régimen especial del municipio de Barcelona.

En cuanto a la jurisprudencia dictada en relación con el procedimiento administrativo, en realidad, no existen pronunciamientos que sean especialmente determinantes, llamativos o específicos del ámbito local, aunque sí pueden reseñarse aquellas sentencias que, a lo largo del año 2007, se han referido a la Administración local y, por esta razón, son aquí expuestas.

En primer lugar, se han dictado varias sentencias que se pronuncian acerca de la legitimación del Estado y las Comunidades Autónomas para impugnar actos y acuerdos de las corporaciones locales. Así, la *STS de 17 de abril de 2007* (Secc. Cuarta, Sala Tercera), en la línea de una jurisprudencia ya muy consolidada y ampliamente citada, afirma que los artículos 65 y 66 LBRL prevén la legitimación tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas para impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que infrinjan el ordenamiento jurídico, previo requerimiento de anulación del acuerdo en cuestión. Igualmente, la *STSJ de Andalucía de 26 de enero de 2007* (Secc. Primera, Sala Tercera) y la *STSJ del País Vasco de 12 de marzo de 2007* (Sala Tercera).

En cuanto al concepto de interesado en el procedimiento administrativo del artículo 31 LRJPAC, puede citarse la *STSJ de Castilla y León de 9 de febrero de 2007* (Secc. Segunda, Sala Tercera), que conoce de la impugnación de un Decreto municipal por el que se acordaba el sobreseimiento y archivo de un expediente disciplinario abierto en virtud de denuncia de un particular. Como reconoce una abundante jurisprudencia citada por la sentencia en cuestión, la legitimación del denunciante se circunscribe a la incoación del procedimiento y al desarrollo de una labor de investigación, no a la resolución de una u otra forma del expediente disciplinario. En el caso en cuestión, en el expediente administrativo aparece que el procedimiento disciplinario ha sido instruido y se han practicado diligencias, por lo que es patente que ha existido instruc-

ción, tramitación y resolución del expediente disciplinario, por lo que procede concluir con la desestimación del recurso.

En relación con la impugnabilidad de actos de la Administración local, la *STS de 27 de marzo de 2007* (Secc. Cuarta, Sala Tercera) califica como acto definitivo, y no de trámite, la resolución del Gobierno de Aragón por la que culmina el procedimiento para la dispensa de la obligación de prestar los servicios municipales mínimos obligatorios, tal y como se regula por el artículo 45.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de la Administración Local de Aragón, que afirma expresamente «que agota la vía administrativa». El que luego dicha resolución se aporte a otro procedimiento administrativo o que el Ayuntamiento se pueda o no acoger a dicha dispensa no cambia su naturaleza de acto definitivo del procedimiento específico de dispensa.

También se han dictado durante 2007 varias sentencias relativas a la fase de tramitación del procedimiento. Así, la *STS de 20 de marzo de 2007* (Secc. Tercera, Sala Tercera) en relación con la omisión de un trámite preceptivo en un procedimiento de otorgamiento de subvención estatal a entidad local. Considera el Tribunal que la actuación de la Subdelegación del Gobierno de Lugo vicia el procedimiento de otorgamiento de subvenciones, porque se ha formalizado al margen del procedimiento establecido en la Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de 10 de mayo de 2001, al incumplir la preceptiva obligación formal de remisión de los proyectos técnicos y presupuestos de obras presentados por el Ayuntamiento en cuestión. Esta desviación procedimental repercute directamente en la esfera de intereses de la Administración local e incide lesivamente en los principios de objetividad y transparencia que rigen el procedimiento subvencional.

Por su parte, la *STS de 20 de febrero de 2007* (Secc. Tercera, Sala Tercera) se pronuncia acerca de la existencia de ciertos defectos formales en la tramitación de un procedimiento de alteración de términos municipales, en concreto, de segregación de parte del territorio de un municipio para agregarlo a otro municipio limítrofe. El Tribunal afirma que se está en presencia de un caso de los contemplados en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que permite la conservación de «aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción». La *STSJ de Madrid de 25 de enero* (Secc. Segunda, Sala Tercera) se pronuncia sobre un acuerdo del Ayuntamiento de Aranjuez por el que se acordó la retirada de las antenas de telefonía móvil que se encuentre en las cercanías de «edificios sensibles». El Tribunal considera que el recurso contra esta decisión municipal ha de ser estimada porque se realiza al margen del planeamiento urbanístico, lo que colisiona con la determinación de los usos urbanísticos y los elementos dotacionales de los que el servicio de telefonía móvil forma parte. Además, califica como «lugares sensibles» determinados lugares, con una enumeración ejemplificativa que no se encuentra debidamente motivada y omite la definición de lo que pueden entenderse como inmediaciones, pues no se establece regla de distancia alguna. Por otro lado, para el desmontaje de dichas instalaciones ha de seguirse el procedimiento de restauración de

la legalidad previsto en los artículos 193 a 195 de la Ley Territorial 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, de forma que antes de acordar el desmontaje ha de requerirse al interesado para que, en el plazo de dos meses, solicite la legalización de las obras o los usos correspondientes. Sólo si el interesado no solicitara la legalización en el plazo de dos meses, o si ésta fuese denegada por ser la autorización de las obras contraria a las prescripciones del Plan de Ordenación Urbanística o de las Ordenanzas aplicables a la licencia u orden de ejecución procederá el desmontaje. En el caso, al haberse omitido dicho requerimiento de legalización, aún careciendo de licencia las instalaciones, el acuerdo que ordena su retirada es nulo de pleno derecho por haber sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Por último, la *STS de 29 de octubre de 2007* (Secc. Tercera, Sala Tercera) declara nulo un acuerdo de un Alcalde que decidió de plano la baja de un funcionario en prácticas, sin tramitación de procedimiento disciplinario alguno y sin dar siquiera trámite de audiencia al interesado, a partir de la sola afirmación de que el funcionario en cuestión había incurrido en comportamiento cívico deficiente.

En relación con los bienes públicos, existen varios pronunciamientos jurisprudenciales que enjuician al respecto ciertas actuaciones de corporaciones locales. En concreto, la *STSJ de Castilla y León, de 24 de abril* (Secc. Tercera, Sala Tercera) considera que un Ayuntamiento ejerció la potestad de recuperación de oficio de bienes de dominio público prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente previsto al respecto. Sostiene el Tribunal que la recuperación de oficio ha de verificarse a través del procedimiento previsto en el artículo 71.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Sin embargo, en el caso enjuiciado, no ha existido acuerdo alguno de iniciación del procedimiento para la recuperación de la posesión a que se refiere el artículo 71 del Reglamento citado, en relación con el artículo 46 del mismo, sobre formas de ejercicio de la acción, y tampoco ha mediado trámite de audiencia de los interesados. En consecuencia, la pretensión de nulidad de pleno derecho del Acuerdo recurrido que se formula al amparo del artículo 62.1.e) LRJPAC es estimada. Igualmente, la *STSJ de Castilla y León, de 12 de junio de 2007* (Secc. Tercera, Sala Tercera) concluye que el acuerdo municipal impugnado no es conforme a derecho pues se ha acordado un deslinde de un camino público respecto a las tierras privadas colindantes sin haber seguido el procedimiento legalmente establecido, por lo que concurre un vicio de invalidez de los actos administrativos impugnados, conforme a lo establecido en el artículo 62.1.e) LRJPAC. La sentencia referida recuerda la doctrina jurisprudencial (en concreto cita la *STS de 22 de mayo de 1985*) conforme a la cual «el deslinde administrativo se configura en nuestro Derecho como una prerrogativa de la Administración, en virtud de la cual puede, sin necesidad de acudir a la intervención del órgano judicial, proceder a delimitar el ámbito de sus bienes y pertenencias, siempre a través del correspondiente procedimiento que terminará con un acto administrativo que como tal gozará de los principios de ejecutividad y ejecutoriedad, sin que a través del deslinde se puedan resolver cuestiones de titularidad».

En lo que hace referencia a la fase de terminación del procedimiento, la *STS de 20 de febrero de 2007* (Secc. Sexta, Sala Tercera) se pronuncia sobre una pretensión de reversión de unos bienes de dominio público cedidos en origen gratuitamente a la Diputación Provincial de Cantabria, por incumplimiento de las finalidades de la cesión, aduciendo deficiente estado de conservación de los bienes, así como falta de desarrollo de las actividades previstas en el acuerdo de cesión. El Tribunal recuerda una reiterada jurisprudencia que afirma que no cabe otorgar por vía del silencio facultades que el ordenamiento jurídico no otorga, y más cuando afectan, como es el caso, a la adquisición de facultades relativas al dominio público, teniendo en cuenta que en el caso de autos no se dan ninguno de los supuestos que según el artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales harían procedente la reversión solventada.

En relación con la declaración de caducidad, en concreto de una concesión de viviendas y terrenos para la construcción de un campamento turístico, la *STS de 9 de junio de 2007* (Secc. Cuarta, Sala Tercera) afirma que el municipio está obligado a seguir el procedimiento establecido en el artículo 137 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales para volver a adjudicar la concesión. Para ello, debe de incoar el expediente de justiprecio de la concesión en el que había de intervenir el titular de la concesión caducada para alcanzar un acuerdo sobre el valor de la misma o, en su defecto, fijar el mismo conforme a lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa de modo que, obtenido el valor de uno u otro modo, se procediera a adjudicar nuevamente la concesión, entregándose el producto de la licitación al titular de la concesión caducada. Sin embargo, para el Tribunal queda claro que la Corporación no procedió de ese modo, sino que excluyó al anterior concesionario de modo total, puesto que declaró que al mismo no le correspondía indemnización alguna, y esa declaración fue la que anuló la Sentencia de instancia.

II. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

1. Contratación administrativa local

Aunque referido a un ámbito específico, que recibe un tratamiento más extenso en este mismo Anuario de Derecho Municipal, merecen ser citados algunos trabajos doctrinales que, en el ámbito de la contratación administrativa en general, y la local, en particular, se ocupan de cuestiones relativas al procedimiento, en este caso, de contratación. Así, hay varios trabajos que se han dedicado al análisis de las especialidades que, para la contratación local, recogía el Anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público, hoy convertido en la *Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público*. Ese es el caso del artículo de José Miguel CARBONERO GALLARDO, publicado bajo el título «Las especialidades de la contratación local en el Anteproyecto

de la Ley de Contratos del Sector Público» (*Contratación Administrativa Práctica*, núm. 60, 2007, pp. 54-60). En esta misma línea, «Aproximación al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público: principales novedades y modificaciones respecto a la regulación actual» (*Revista de Estudios Locales*, núm. 97, 2007, pp. 37-63), cuyos autores son Hilario LLAVADOR CISTERNAS y Emilia SELVA SACANELLES. También, por último, «La fiscalización de las entidades locales en el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público: preparación y adjudicación», elaborado por Francisco de Paula AGUILERA GONZÁLEZ (*Contratación Administrativa Práctica*, núm. 67, 2007, pp. 50-57).

Referido a un aspecto muy concreto, como es el procedimiento de resolución contractual para un contrato de gestión de servicio público municipal, se ha publicado «Gestión de un hotel municipal: aspectos sustantivos y procesales de la resolución contractual», elaborado por Enrique SÁNCHEZ GOYANES (*Contratación Administrativa Práctica*, núm. 61, 2007, pp. 27-39).

En relación con el procedimiento de adjudicación, con referencias al ámbito local, *El Consultor de los Ayuntamientos* (núm. 7, 2007, pp. 377-389) ha publicado el artículo de Rafael HERNÁNDEZ DOMINGO, bajo el título «Actuación de la Mesa de Contratación en el procedimiento de adjudicación de los contratos e impugnación de sus actos. Vicisitudes».

Igualmente se puede citar, aunque referido a todas las Administraciones Públicas, incluida, por tanto, la local, el trabajo de Emilio MOLINERO CUESTA, «Contratos administrativos: presentación y envío por correo de las proposiciones de licitadores» (*Contratación Administrativa Práctica*, núm. 70, 2007, pp. 29-37), por cuanto se refiere a un ámbito típicamente procedimental, como es la presentación de proposiciones por parte de los licitadores que aspiran a ser contratistas de la Administración.

En cuanto a las novedades legislativas de este ámbito, se puede citar la aprobación de la *Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios postales*.

Por último, en lo que hace a la contratación local en la Comunidad Foral Navarra, se ha aprobado la *Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero*, que modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en materia de contratación local.

2. Gestión e inspección tributaria

En materia de procedimiento de gestión e inspección tributaria de carácter general, aplicable a todas las Administraciones públicas, se ha aprobado el *Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos*. Este reglamento es comentado por el Profesor Casimiro LÓPEZ GARCÍA en un artículo que lleva por título «Comentarios al Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria

y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos», que ha sido publicado en la revista *Tributos Locales* (núm. 75, 2007, pp. 11-25).

En el ámbito estrictamente del procedimiento tributario local, Andrés GARCÍA MARTÍNEZ ha publicado «La participación de las empresas privadas en la inspección de los tributos locales» (*Tributos locales*, núm. 68, 2007, pp. 11-44).

3. Procedimiento sancionador

Sobre esta cuestión, el Prof. Alejandro NIETO GARCÍA, ha publicado en *Cuadernos de Derecho Local* (núm. 14, 2007, pp. 7-13) un trabajo titulado «Régimen sancionador de las Administraciones Públicas: últimas novedades. Pasos recientes del proceso sustantivizador del Derecho Administrativo Sancionador».

4. Urbanismo

En el ámbito del procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento, la Comunidad Autónoma de Madrid ha aprobado la *Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid*, cuyo artículo 10 modifica el artículo 56 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en relación con la tramitación de los Avances de Planeamiento, lo que afecta a los trámites preceptivos a los que están sujetos (información pública, informes). Asimismo, el artículo 11 de la misma Ley 3//2007 introduce un artículo 56.bis en la Ley de Suelo autonómica, en relación con el trámite de información pública que les corresponde convocar a los Ayuntamientos en la tramitación de los instrumentos de planeamiento, garantizando «la transparencia, difusión y divulgación suficiente entre todos los vecinos». Por último, los artículos 15 y 16 de la citada Ley 3/2007 modifican los artículos 61 y 62 de la Ley de Suelo de Madrid en relación con la determinación de los órganos competentes para la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico. Sobre algunos aspectos de esta reforma se puede consultar la Editorial del Boletín del Instituto de Derecho Local (<http://idluam.org/files/boletines/BOLETIN116.html>) correspondiente a los meses de julio y agosto de 2007, elaborada por Francisco VELASCO CABALLERO, y que lleva por título, «Reducción de la autonomía municipal en la Comunidad de Madrid». En este trabajo se analizan las repercusiones que sobre la autonomía municipal tienen algunas de las reformas procedimentales llevadas a cabo por la citada Ley 3/2007 de la Comunidad de Madrid. En concreto, conforme al artículo 10.2 de la Ley 3/2007, que modifica el artículo 56 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, la aprobación municipal de los «avances» de nuevos planes generales y planes de sectorización (incluidas las revisiones y las modificaciones cualificadas) necesita de previo «Informe de Impacto Territorial» por parte del «Consejo de Gobierno» (sic) de la Comu-

nidad de Madrid. El informe es, además de preceptivo, vinculante. La Comunidad dispone de seis meses para la emisión del informe, y en caso de silencio se presume negativo. O sea, que si la Comunidad no evacua el informe en seis meses el Ayuntamiento no puede aprobar el avance del nuevo plan, y con ello queda bloqueado el poder de ordenación urbanística municipal. El autor, tras realizar un repaso de la jurisprudencia constitucional al respecto, concluye afirmando que el artículo 10 de la Ley 3/2007 entra en el umbral de lo constitucionalmente reservado a los municipios. Por ello, propone una interpretación de la nueva Ley madrileña que resulte conforme con la Constitución: el «informe de incidencia territorial», previo a la aprobación municipal del «avance» de nuevo plan municipal, sólo será preceptivo y vinculante en la medida en que concrete sobre casos concretos la «estrategia territorial» previamente aprobada y publicada por la Comunidad de Madrid. Además, rechaza la constitucionalidad de dotar, como hace el artículo 10.3 de la Ley 3/2007, de los efectos propios del silencio negativo a la no emisión del «informe de incidencia territorial» por la Comunidad de Madrid, en el plazo de seis meses. Sostiene que el silencio negativo es un instrumento inadecuado para articular las relaciones jurídico-públicas entre dos entidades territoriales dotadas de autonomía constitucional: los municipios, de un lado, y las Comunidades Autónomas, de otro lado.

En relación con el procedimiento en materia urbanística, Juan Antonio CHINCHILLA PEINADO ha publicado su trabajo «Procedimiento de otorgamiento de licencias de edificación», en la *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente* (núm. 238, 2007, pp. 87-148). También puede ser citado, en este ámbito, el trabajo de Enrique SÁNCHEZ GOYANES sobre un aspecto o trámite procedimental concreto como es la evaluación ambiental, dentro de la aprobación de los planes urbanísticos («La compleja integración de la evaluación ambiental en la aprobación del planeamiento urbanístico», *Revista de Estudios Locales*, núm. 97, 2007, pp. 20-36).

5. Energía

El Gobierno de la nación ha aprobado el *Real Decreto 47/2007*, por el que se aprueba el *Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción*, en el que se prevé la participación local en la Comisión Asesora.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha regulado, a través de la *Ley 2/2007, de 27 de marzo*, que regula la *garantía de suministro eléctrico* en la Comunidad de Madrid, cuyo artículo 17 establece el procedimiento a seguir para que los Ayuntamientos emitan informe favorable en las autorizaciones de instalaciones de interés general.

6. Mediación familiar

En esta materia, la Comunidad de Madrid ha aprobado la *Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Normas reguladoras de la Mediación Familiar*, en cuyo Título III se regulan los

aspectos del procedimiento de mediación familiar, desde el momento de la solicitud de las personas interesadas, que debe plantearse voluntariamente y de común acuerdo, hasta la sesión final de la mediación, en las actuaciones de mediación familiar profesional que se realicen en el ámbito de la Comunidad de Madrid.